
[¿Caminos a seguir?](#)

El capital especulativo y los actores interesados como bancos, consultores, grandes empresas, fondos de inversión, así como otros actores aliados como ONGs y, frecuentemente, nuestros propios gobiernos pretenden con el *comercio de servicios ambientales* apoderarse de los territorios de los pueblos para 'vender' y lucrar. Así, la lucha por los derechos de los pueblos de los bosques que dependen de ellos tiende a tornarse más compleja y difícil.

¿Cómo continuar esa lucha? A continuación, algunas posibles orientaciones:

- Muchas comunidades que viven en bosques, sean campesinas, tradicionales o indígenas, comparten la preocupación sobre cómo conservar esas áreas, principalmente cuando las mismas se tornan más escasas y la necesidad por tierras aumenta. Muchas veces, exigen, en una demanda justa, el apoyo del Estado para garantizar su conservación.

Las informaciones recogidas en este artículo alertan a que las comunidades, en vez de entrar en esquemas como el *PSA* y el *comercio de servicios ambientales*, reúnan todas las informaciones sobre qué es y qué representa la idea de *servicios ambientales* y su *comercio*, promoviendo debates con toda la comunidad. El presente texto tiene exactamente la finalidad de alimentar esos debates.

Y si los gobiernos gastan recursos públicos para ayudar a grandes empresas y bancos, el mismo dinero puede ser aplicado también en políticas públicas para ayudar a las comunidades que buscan conservar y recuperar sus áreas forestales, sin necesidad de transformar esas acciones en mecanismos perversos como el *comercio de servicios ambientales*, lo que profundiza el proceso de mercantilización y financierización de la naturaleza.

- Una característica común del *comercio de servicios ambientales* y del 'mercado de carbono' es la falta de transparencia sobre este tipo de mecanismo. Es de suma importancia exigir, en su país, informaciones a las autoridades, a los parlamentarios, sobre la reglamentación ya aprobada y la que está siendo discutida sobre este tipo de actividad. En países donde la legislación sobre el *comercio de servicios ambientales* está elaborándose rápidamente, como en Brasil, hay claras contradicciones con la constitución del país, por ejemplo, cuando los proyectos de ley proponen la privatización de algo fundamental y de libre acceso para toda la población. Por ejemplo, en el estado de Acre, entidades de la sociedad civil están pidiendo al Ministerio Público Federal que inicie una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Estadual 2.308/2010 que instituye el Sistema de Incentivos al Servicio Ambiental del estado.

- La agricultura campesina en casi todos los países del Sur sufre la falta de apoyo, de políticas públicas, para mantenerse y fortalecerse. Ese tipo de agricultura, practicada incluso en áreas de bosques sin que haya sido una amenaza a la continuidad del bosque ha posibilitado una convivencia y una interacción con el mismo. La idea del *comercio de servicios ambientales* descarta esa convivencia. Más apoyo en forma de políticas públicas para ese tipo de agricultura fortalecería la seguridad y la soberanía alimentaria de esas poblaciones y de las regiones en las que están viviendo. Además, la agricultura campesina ya contribuye, como la Vía Campesina ha divulgado, con

el 'enfriamiento' del planeta. Los Estados, en vez de conceder apoyo a las comunidades campesinas, a menudo financian y facilitan la introducción del *comercio de servicios ambientales*. Significa gastar dinero público y, a veces, asumir nuevas deudas financieras con instituciones internacionales como el Banco Mundial, cuando estas ofrecen 'incentivos' para ese nuevo tipo de 'comercio'. La carga nuevamente es para el pueblo.

- La mercantilización y la financierización de la naturaleza señalan la importancia de construir alianzas más amplias entre quienes combaten el sistema financiero internacional, otras que luchan contra la privatización de la naturaleza, y aún otras que luchan diariamente por sus territorios y ecosistemas.

- Una alianza amplia y fuerte contraria a la 'economía verde' está siendo propuesta a través de la convocatoria camino a Rio+20 (41). Busca concretar una agenda en conjunto con organizaciones y redes no gubernamentales y movimientos sociales, incluyendo acciones de solidaridad a comunidades impactadas por empresas que se apoderan de sus territorios y los degradan, como es el caso de la CSA en Rio de Janeiro, de propiedad de las multinacionales Vale y Thyssenkrup, o contaminan el mar y afectan a pescadores como la petrolera Petrobras. La agenda conjunta prevé también la realización de la Asamblea de los Pueblos Afectados por proyectos privatizadores y degradantes en la víspera de Rio+20.

- Es necesario continuar con más fuerza la lucha para que las comunidades que conservan los bosques tropicales y dependen de ellos puedan tener el derecho y el control sobre esos espacios. Significa luchar por el reconocimiento de los derechos de esos pueblos sobre sus territorios- algo aún inexistente o insuficientemente garantizado en muchos países de Latinoamérica, África y Asia. En países donde ya hubo muchos avances como en Brasil, la tendencia es de retroceso en los derechos indígenas y en los derechos de otros pueblos tradicionales, mientras crecen sin cesar los esfuerzos para crear un 'mercado global en *servicios ambientales*'.

- Precisamos continuar la resistencia y la denuncia del capital financiero y sus actividades especulativas. A pesar de la crisis que afecta principalmente a las mayores economías del mundo, casi todos los países y sobretodo sus gobiernos continúan defendiendo el sistema e involucrados en él. Sin embargo, aumentan, en todo el mundo, las críticas y las movilizaciones que claman por cambios profundos especialmente en relación a la financierización cada vez mayor de la economía, y también de la naturaleza, con una creciente ola de privatización de todo lo que aún es público. Por eso, es necesario continuar luchando contra la expansión de esa lógica del capital especulativo para que no se apodere de áreas fundamentales para el futuro de la humanidad, inclusive de los bosques tropicales.

Corresponde que todos denunciemos cada vez más las perversidades y contradicciones de esa lógica y sus impactos concretos en los territorios. Precisamos apoyar y fortalecer la resistencia de los pueblos para que, en primer lugar, les sea asegurado el derecho sobre sus territorios y para que se revierta el proceso de privatización de la naturaleza, también en el futuro, garantizando el libre acceso a las poblaciones que siempre la cuidaron e hicieron usufructo de ella.

Como dijo la habitante del Congo en este artículo: "... somos felices con nuestro bosque, porque nos permite conseguir todo lo que necesitamos". Y eso no tiene precio.

